**Contribuciones del Estado mexicano al informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, con especial atención a las prácticas denominadas “terapias de conversión”.**

1. **¿Cuáles son las diferentes prácticas que entran en el ámbito de las llamadas “terapias de conversión” y cuál es el denominador común que permite agruparlas bajo este nombre?**

En México, a la fecha, ningún ordenamiento jurídico establece explícitamente qué prácticas son consideradas “terapias de conversión”; sin embargo, se reconoce, en correspondencia con los estándares internacionales, que existen varias formas en las que se presentan los Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual (ECOSIG). Por ejemplo: coerción y falta de consentimiento, privación ilegal de la libertad, violencia verbal y amenazas, uso forzado de medicamentos, violaciones sexuales, terapias de aversión, electroshocks y/o exorcismos. [[1]](#footnote-1)

En ese sentido, en nuestro país la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) establece como conducta discriminatoria:[[2]](#footnote-2)

*“Realizar o promover violencia física, sexual o psicológica […] por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual […]”*

El ordenamiento citado establece de manera amplia, que dichas terapias corresponden a la realización de una práctica discriminatoria derivada de un motivo prohibido de discriminación cuyo objeto es limitar o negar el derecho de las personas al libre desarrollo de su personalidad

1. **¿Existen definiciones adoptadas y utilizadas por los Estados sobre las prácticas de la llamada “terapia de conversión”? en caso afirmativo, ¿cuáles son esas definiciones y cuál fue el proceso mediante el cual se crearon o adoptaron?**

El Estado mexicano, con base en los estándares internacionales, ha reconocido y adoptado el término ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género)[[3]](#footnote-3) como aquellos supuestos tratamientos psicoterapéuticos o basados en la fe que, como su nombre lo indica, buscan modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas[[4]](#footnote-4).

Conforme a la literatura actual, se ha decidido llamar a estas prácticas bajo el nombre de ECOSIG, ya que se limitan sólo a “esfuerzos” que intentarán -mediante métodos poco éticos- cambiar algo que la ciencia ha demostrado no se puede cambiar. Además, no son únicamente prácticas ofrecidas en forma de sesiones psicológicas o psiquiátricas, sino que también son promovidas por grupos religiosos, de superación personal o contra las adicciones[[5]](#footnote-5).

El término ECOSIG se prefiere al uso de otros como “terapias de conversión” o “terapias reparativas” por dos razones: la primera es que al usar la palabra “terapia” se les valida como tal cuando no lo son; y la segunda es que es inexacto, ya que estas prácticas no pertenecen a la medicina o psicología formal, es decir, no son terapéuticas.

1. **¿Cuáles son los esfuerzos actuales de los Estados para aumentar su conocimiento de las prácticas de la llamada “terapia de conversión”? ¿existen esfuerzos para producir información y datos sobre prácticas?**

Ver respuesta a la pregunta 4.

1. **¿Qué tipo de información y datos recopilan los Estados para comprender la naturaleza y el alcance de las llamadas “terapias de conversión” (por ejemplo, mediante inspecciones, investigaciones, encuestas)?**

En un esfuerzo promovido por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), con apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y que contó con la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en México se elaboró la *Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018* (ENDOSIG), autoadministrada en línea, que respetó los criterios de libre reconocimiento de la identidad.

Con esta metodología, la ENDOSIG sorteó la dificultad de captar información confiable sobre la Orientación Sexual e Identidad de Género (OSIG) que prevalece en encuestas cara a cara y en hogares a través de una persona informante que responde por todas las demás integrantes.

Estuvo dirigida a personas de 16 años y más, residentes en el territorio nacional y que se autoidentifican como gays, lesbianas, bisexuales, trans (transgénero, travestis, transexuales) y de otras orientaciones sexuales e identidades de género no normativas.

La ENDOSIG recabó una gran variedad de información, siendo de destacar la relativa a las prácticas de discriminación y violencia que ocurren en múltiples espacios de socialización (familias, comunidades, escuelas, centros de trabajo, medios de comunicación, instituciones gubernamentales, etc.), y que tienen un impacto cotidiano, múltiple y acumulativo en el ejercicio de derechos, goce de libertades y acceso a recursos, bienes y servicios. Contó con un poco más de 12 mil respuestas de todo el país.

Dentro de la información que documenta la ENDOSIG, destaca que en los servicios de salud también es recurrente la discriminación por tener una orientación sexual y, sobre todo, una identidad de género no normativa (una cuarta parte de las personas trans reporta alguna situación de discriminación durante la atención médica, más del doble que las mujeres lesbianas, la categoría de orientación sexual no normativa con el reporte más alto, con 12%). Resalta la frecuencia con la que se hace sentir incomodidad a las personas por su OSIG (76%), y se ven obligadas a ocultarla (49.4%). También es significativo que cuatro de cada diez personas reportan no haber recibido tratamiento adecuado, que a casi la tercera parte se le minimizó el padecimiento, e incluso que al 15% se le sugirió una terapia o tratamiento para “curar” o “corregir” su (OSIG).



Por otro lado, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) junto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) han diseñado conjuntamente el cuestionario de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) que es un ejercicio probabilístico pionero en su tipo que se levantará en hogares a población de 15 años y más.

Dentro de las temáticas que la encuesta aborda está la reacción de familiares al conocer la orientación sexual y/o identidad de género no normativa de las personas.

Del 9 al 20 de diciembre se realiza la prueba de campo en 5 mil viviendas distribuidas en las 32 entidades para evaluar el diseño conceptual y la pertinencia de las preguntas contenidas en el cuestionario. El levantamiento de la ENDISEG está programado para el 2020.

1. **¿Se han identificado los riesgos asociados a las prácticas de la llamada “terapia de conversión”?**

El Estado mexicano, en correspondencia con los estándares internacionales, reconoce a las “terapias de conversión” como una forma de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

En este sentido, nuestro país comparte lo que diversos organismos internacionales de derechos humanos han advertido sobre la transgresión de derechos fundamentales y el daño fáctico y potencial que implican las denominadas “terapias de conversión”. Por ejemplo:

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que “la no discriminación, en el contexto del derecho a la salud sexual y reproductiva, abarca también el derecho de todas las personas, incluidas las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, a ser plenamente respetadas por su orientación sexual, identidad de género o condición de intersexualidad […] las normas que disponen que las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales sean tratadas como enfermas mentales o psiquiátricas, o sean ‘curadas’ mediante un ‘tratamiento’, constituyen una clara violación de su derecho a la salud sexual y reproductiva”[[6]](#footnote-6).

De igual forma, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha condenado la imposición de “tratamientos” mediante los que se pretende cambiar la orientación sexual de una persona, y ha advertido que estas “terapias” son “dañinas, contrarias a la ética, carentes de fundamentos científicos e ineficaces, además de que podrían constituir una forma de tortura”[[7]](#footnote-7).

Asimismo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó que este tipo de terapias que buscan modificar la orientación sexual e identidad de género de jóvenes LGBTI son carentes de ética, sin bases científicas e ineficaces, además de poder llegar a la tortura[[8]](#footnote-8).

Cabe resaltar, como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, si bien “las personas pueden estar en un proceso de desarrollo constante y fluctuante, construyéndose a sí mismas en relación con una determinada orientación sexual, identidad y expresión de género. No obstante, estas categorías y esta posible fluctuación y movilidad de una o todas estas categorías inherentes a la persona no supone que puedan ser modificadas por terceras personas o por el Estado, so pena de configurarse una vulneración de su dignidad[[9]](#footnote-9).

Con base en las consideraciones previas, se concluye que dichas “terapias” trasgreden los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la integridad personal y a la igualdad y no discriminación; además de que son fáctica y potencialmente dañinas al desconocer la diversidad sexual y estigmatizar la homosexualidad, contribuyendo a la persistencia de la homofobia[[10]](#footnote-10).

1. **¿Existe una posición del Estado sobre qué salvaguardias son necesarias y qué salvaguardias existen para proteger los derechos humanos de las personas en relación con las prácticas de las llamadas “terapias de conversión”? esta pregunta incluye lo siguiente:**
2. **Medidas de protección para evitar que las personas sean sometidas a “terapias de conversión”**
3. **Extensión de las normas legales o políticas administrativas para hacer responsables a los proveedores de atención médica y a otras personas involucradas en dichas “terapias de conversión”.**

El 04 de octubre de 2018 las Senadoras Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentaron una Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal, y un artículo 465 Bis a la Ley General de Salud[[11]](#footnote-11), cuya finalidad es sancionar los actos llevados a cabo para “corregir” o “curar” a quienes tienen una orientación sexual, una identidad de género, o una expresión de género no normativa, que comúnmente son conocidos como “Esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género” (ECOSIG). Las modificaciones propuestas son las siguientes:

*“****TÍTULO OCTAVO.***

***CAPÍTULO IX.***

*Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las personas.*

***Artículo 209 Ter.*** *Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.*

*Se aumentará al doble la sanción prevista en el párrafo que precede, cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de dieciocho años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.*

*En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.*

*Las sanciones señaladas en el primer párrafo de este artículo se aumentarán al doble de la que corresponda, cuando la persona autora tuviere para con la víctima, alguna de las relaciones que a continuación se enuncian o bien, se sitúen en alguno de los siguientes supuestos:*

*a) Relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima;*

*b) Quien se valga de función pública para cometer el delito; y*

*c) Cuando la persona autora emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima.*

*En los casos de los incisos a) y b), además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquiera otro de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta. En caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva.*

*Bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.*

***Artículo 209*** *Quater. Para efecto de determinar el daño ocasionado al libre desarrollo de la personalidad de la víctima, se deberán solicitar los dictámenes necesarios para conocer su afectación. En caso de incumplimiento a la presente disposición por parte del Ministerio Público, éste será sancionado en los términos del presente Código y de la legislación aplicable.*

*En los casos en que el sentenciado se niegue o no pueda garantizar la atención médica, psicológica o de la especialidad que requiera, el Estado deberá proporcionar esos servicios a la víctima.*

***SEGUNDO.*** *Se adiciona un artículo 465 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:*

*Artículo 465 Bis. Las personas profesionales, técnicas o auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas, quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas en términos de lo dispuesto por el artículo 209 Ter del Código Penal Federal y además, serán suspendidas en el ejercicio profesional de uno a tres años. En caso de reincidencia, se impondrá como pena, además, la prohibición definitiva del ejercicio profesional correspondiente, debiendo cancelarse el registro de la cédula profesional respectiva.”*

Actualmente, el Dictamen se encuentra pendiente de deliberarse, analizarse y votarse en la Comisión de Estudios Legislativos. De ser el caso de su aprobación, se turnará al Pleno del Senado de la República para la consideración correspondiente.

Lo anterior, además, es congruente con lo evidenciado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en contra de los ECOSIG[[12]](#footnote-12), en el sentido de que dichos esfuerzos son prácticas fraudulentas que atentan contra la dignidad y los derechos a la igualdad y no discriminación, a la salud física y emocional, al libre desarrollo de la personalidad, a vivir una vida libre de violencia, entre otros, de las personas de la diversidad sexual y de género no normativa, afectando, principalmente, a niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes.

Además de que son conductas que, por lo general, se expresan a través de tratamientos hormonales, esterilizaciones, cirugías, y/o evaluaciones psiquiátricas realizadas de manera forzada o coercitiva; violencia sexual y acoso por la identidad de género, expresión de género, o por la orientación sexual de las personas; amenazas; exclusión y bullying en contextos de educación; patologización de sus identidades y orientaciones; abuso verbal sistemático y humillación, que pueden llegar a constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso, pueden resultar en tortura.

En ese sentido, el Estado mexicano sustenta su postura, considerando que la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género son dimensiones íntimas y privadas de la personalidad como esenciales en todo proyecto de vida, y que son reconocidas como categorías protegidas contra la discriminación, por lo que resulta fundamental la adopción de medidas como la que se proponen en el pre dictamen en estudio, encaminadas a su protección y garantía.

1. **¿Existen instituciones, organizaciones o entidades estatales involucradas en la ejecución de las prácticas de la llamada “terapia de conversión”? En caso afirmativo ¿qué criterios se han seguido para considerarlos como una forma válida de acción estatal?**

Sin respuesta.

1. **¿Alguna institución del Estado ha adoptado una posición en relación con las prácticas de la llamada “terapia de conversión” por ejemplo;**
2. **Entidades o dependencias del Estado encargadas de las políticas públicas;**
3. **Órganos parlamentarios;**
4. **El poder judicial;**
5. **Instituciones Nacionales de Derechos Humanos u otras institucionales del Estado;**
6. **Cualquier otra entidad u organización.**

En México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México (COPRED) y otras instituciones[[13]](#footnote-13), han denunciado los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) como prácticas fraudulentas que atentan contra la dignidad, salud física, emocional y desarrollo libre de la personalidad, libre de violencia y discriminación de las personas de la diversidad sexual y de género no normativa.

Congruente con lo anterior y con la declaración de Ciudad Amigable LGBTTTI, la Ciudad de México, a través del COPRED, ha emprendido acciones orientadas a eliminar la falsa creencia de mirar a la homosexualidad y a la transexualidad como trastornos que deben de ser curados.

Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) mediante su Pronunciamiento 01/2017 determinó que las llamadas “terapias de conversión” constituyen una forma de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Además, alerta sobre los peligros que conlleva la promoción y realización de esfuerzos que pretendan “corregir” la orientación sexual y/o identidad de género de las personas (ECOSIG), pues por lo regular se ejecutan a través de tratamientos hormonales, esterilizaciones, cirugías y evaluaciones psiquiátricas de manera forzada o coercitivas, violencia y acoso con base en su identidad de género y orientación sexual, amenazas, patologización de sus identidades, abuso verbal sistemático y humillación, mismos que podrían configurar malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes e inclusive podrían considerarse como tortura. [[14]](#footnote-14)

Por otro lado, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal con la colaboración del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), especialistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, expidió el “Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI)” y Guías de Atención Específicas, con el objetivo de contribuir a garantizar el acceso efectivo y sin discriminación a los servicios de salud de las personas LGBTTTI en los establecimientos que componen el Sistema Nacional de Salud. Dicho Protocolo es claro en señalar que ninguna actividad vinculada a la prestación de servicios de salud, deberá considerar como patología la orientación sexual, identidad y/o expresión de género y las variaciones intersexuales[[15]](#footnote-15).

A partir de ello, son los sectores público y privado, en especial atención a los espacios académicos y de salud, quienes deben proteger los derechos asociados a la construcción del proyecto de vida de las personas, alertar sobre la crisis de vulneración de derechos humanos de esta población, invitar a la reflexión sobre estas problemáticas y se sumen a la promoción del respeto a la dignidad y libertades de las personas.

1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Violencia contra las personas LGBTI, Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículo 9, fracción XXVIII. [↑](#footnote-ref-2)
3. Algunos críticos del término señalan que se debería usar la palabra “cambiar” en lugar de “corregir”, ya que, de no hacerlo, sigue refiriendo la orientación sexual o identidad de género no normativa como algo que está descompuesto y se busca corregir. [↑](#footnote-ref-3)
4. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) Mitos y realidades sobre las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Disponible en: <https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Mitos%20y%20realidades%20Osig%281%29.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Oficina de Enlace y Partenariado en México. Ibidem [↑](#footnote-ref-5)
6. Observación general núm. 22 (2016), relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) párr. 23 <http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f22&Lang=en> [↑](#footnote-ref-6)
7. Observación general núm. 20 (2016) sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia, párr. 34 <http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f20&Lang=en> [↑](#footnote-ref-7)
8. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2015). Discriminados y vulnerados: Jóvenes LGBT e intersexuales necesitan reconocimiento y protección de sus derechos. Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, 17 de mayo. Disponible en: <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15941&LangID=E> [↑](#footnote-ref-8)
9. Citado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe sobre Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América. 2015, párr. 200 [↑](#footnote-ref-9)
10. CONAPRED. Pronunciamiento 01/2017 Las “Terapias de Conversión” una forma de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Disponible en: <https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=974&id_opcion=&op=213> [↑](#footnote-ref-10)
11. Senado de la República. Ver <https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-04-1/assets/documentos/Iniciativa_Art.465-BIS_LGS.pdf> [↑](#footnote-ref-11)
12. CONAPRED. Pronunciamiento 01/2017 Las “Terapias de Conversión” una forma de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Disponible en: <https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=974&id_opcion=&op=213> [↑](#footnote-ref-12)
13. Organizaciones e instituciones firmantes del pronunciamiento: Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), YAAJ México A.C., Escuela de Administración Pública del Distrito Federal (EAP), Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), Secretaría de Educación de la Ciudad de México (SEDU), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Universidad Insurgentes (UI), Asociación por las Infancias Transgénero y la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica [↑](#footnote-ref-13)
14. CONAPRED. Pronunciamiento 01/2017 Las “Terapias de Conversión” una forma de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Disponible en: <https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=974&id_opcion=&op=213> [↑](#footnote-ref-14)
15. Secretaría de Salud, Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI)” y Guías de Atención Específicas. Disponible en: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462171/Protocolo_Comunidad_LGBTTI_DT_Versi_n_IV_19__1_.pdf_Versi_n_15_DE_MAYO_2019.pdf> [↑](#footnote-ref-15)